



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 30.036/2023

**“REMADEX S.A. c/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

REMADEX S.A. impugna la Resolución N° 9103 del 03 de abril de 2023 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, que al confirmar una anterior, le impuso una multa de \$ 1.070.133,20 por infracción al artículo agregado sin número a continuación del 40 de la ley 11.683 al constatarse un incumplimiento al debido registro de alta de 19 trabajadores relevados motivo por el cual le impuso una sanción, respecto de cada trabajador, de diez veces el monto de la base imponible mínima prevista en el art.9 de la ley 24.241 y sus modificatorias (texto sustituido por el art. 1° de la ley 26.222), totalizando un reclamo de \$ 1.070.133,20.

Concretamente la impugnante expresa que la resolución atacada carece de razonabilidad pues no se expide sobre el caso concreto ni sobre los hechos denunciados.

Plantea la falta de notificación y nulidad del acto administrativo atacado. Expresa que fue notificada de la apertura del sumario con fecha 08/10/2019 efectuando su descargo en tiempo y forma, conf. art. 57 de la ley 10.149. También explica que el organismo actuante insiste en sostener que mantiene a 19 trabajadores en relación de dependencia sin la debida registración y declaración mediante constancia de relevamiento del expte 7-99-938921-2018 cuando de hecho no es así pues estas personas son “agentes de promoción e intermediación” y no empleados suyos, no existiendo entre las partes una relación jurídica y/o económica pues no perciben sueldo fijo ni están sujetos a subordinación horaria. Se trata de verdaderos contratos de agencia. Ofrece prueba informativa, testimonial y pericial, solicitando se deje sin efecto la multa impuesta, así como también la comunicación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

El Ministerio demandado rechaza el planteo. Relata que de acuerdo a lo dispuesto en el punto 2 del Anexo de la Resolución Conjunta MTEySS y AFIP

Fecha de firma: 21/11/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37951871#383533811#20231113210325798



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

5186/2022 las notificaciones cursadas en el domicilio fiscal resultan validas debiendo la impugnante adoptar las medidas a fin de tomar conocimiento del contenido de dichas notificaciones. Tampoco resulta a su juicio nulo el acto administrativo atacado pues no se dan ninguno de los supuestos previstos en el art. 14 de la ley 19.549 para declarar su nulidad. Refiere que en realidad la actora no se presentó a la audiencia de descargo fijada para el 15/11/2018 declarándose su rebeldía, lo que determinó que perdiera la posibilidad de valerse de prueba testimonial, así como también acreditar el diligenciamiento de oficios o producir otro tipo de prueba tendiente a demostrar los hechos por ella invocados.

El apelante dio cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820, por lo que corresponde la habilitación de la presente instancia y proceder al conocimiento de la cuestión planteada.

La lectura de la causa revela que con fecha 06/08/2018 se llevó a cabo una inspección por funcionarios del Ministerio actuante en la calle Las Heras 3739 de la Ciudad de Buenos Aires, sede comercial de REMADEx S.A.

En dicha ocasión fueron relevadas 28 personas, lo que a posteriori daría lugar a un reclamo por 19 de ellas ya que el organismo entendió que no fueron registradas en legal tiempo y forma.

La constancia de inspección fue suscripta por el inspector actuante y por la Dra. Redote Ivaldi, letrada apoderada de la empresa en la presente causa, a quien se entregó una copia de lo actuado.

Ahora bien, de la referida constancia de inspección surge que las notificaciones que curse el organismo serán efectuadas al domicilio fiscal. Entre ellas la comunicación a la audiencia de descargo que también podrá ser consultada a través de servicio “e-ventanilla” de la página web de AFIP.

REMADEX S.A. no se presentó a la audiencia designada para el 15 de noviembre de 2018 a las 10.30 hs, decretándose su rebeldía y perdiendo de este modo la posibilidad de producir prueba testimonial y acreditar el diligenciamiento de oficios.

En la impugnación presentada la apelante expresa que con fecha 08/10/2019 efectuó un descargo, en los términos del artículo 57 de la ley 10.149, ofreciendo a través de distintos medios probatorios elementos tendientes a demostrar la veracidad de los hechos denunciados por su parte.

No asiste razón a la quejosa.

Ello por cuanto resulta aplicable en la especie la Resolución 655/2005 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que, en su artículo 3º) última parte establece que el acta de comprobación que dará lugar a la apertura del sumario, se agregará a la actuación y su contenido será notificado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

fehacientemente al empleador por cualquiera de los medios previstos en el art. 100 de la ley 11.683 al domicilio fiscal del empleador. En caso de no contar con domicilio fiscal, se notificará en el domicilio legal o en el domicilio donde se efectuó la fiscalización, con lo que no puede invocarse ignorancia sobre lo actuado y el conocimiento de la citación a una posterior audiencia de descargo (art. 386 CPCCN).

Por su parte, el mencionado art. 100 inciso g) de la ley 11.683 prevé las formas en que deben practicarse las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago etc. y entre ellas menciona la comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable, en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP. Ello así, no puede la impugnante argüir ignorancia sobre la obligación que pesaba sobre su parte respecto a la audiencia designada a fin de demostrar la veracidad de los hechos invocados.

Cabe recordar que la referida Resolución 655/05 en su art. 7º establece que la prueba de la que intente valerse el imputado se deberá ofrecer y producir en la audiencia de descargo prevista en el art. 3º inciso d) de dicha resolución, correspondiéndole a él sin excepción alguna la carga de aquella. En el mismo acto la autoridad de aplicación dispondrá la producción de la prueba ofrecida que resulte conducente para la resolución de las actuaciones, rechazando en forma fundada, aquella manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria.

En igual sentido la ley 18.695, a través de su articulado dispone que en la audiencia de descargo el imputado podrá argumentar todo lo que estime conveniente en beneficio de su postura, sea negando la veracidad de los hechos documentados en el acta, su presunta antijuridicidad y falta de tipicidad e, incluso, cuestionar la validez y legitimidad del proceso iniciado. La falta de comparecencia del imputado a la audiencia de descargo permite que sea declarado en situación de rebeldía procesal y autoriza a la emisión de la resolución final. Es por ello que el sumariado deberá ofrecer al momento de la audiencia la prueba que estime conveniente para su defensa. Si no lo hace caduca su derecho a ofrecerla y la autoridad de control puede declarar la causa de puro derecho y emitir la resolución que entienda corresponde (conf. Pirolo, Miguel Ángel “Derecho Laboral. Derecho Procesal del Trabajo-Derecho Administrativo Sancionatorio del Trabajo, TºIV pág. 777 y sgtes. Editorial La Ley).

Por último, cabe aclarar que la ley 10.149 no resulta aplicable en la especie toda vez que su texto reglamenta el proceso de fiscalización en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y no en Capital Federal donde se encuentra el asiento del negocio de la impugnante.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Planteada así la cuestión, y más allá del ofrecimiento de prueba formulado por la presentante ante esta Alzada judicial, lo decidido en la instancia a quo deviene ajustado a derecho por no observarse violentado el derecho al debido proceso adjetivo del impugnante (conf. art. 1º inciso f. 2. de la ley 19.549).

En cuanto a los honorarios, atendiendo a la naturaleza, complejidad, eficacia de la tarea realizada y lo dispuesto en el artículo 1.255 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación se establecen los honorarios que retribuyen la labor de la asistencia letrada de la parte actora en 2 UMA (\$50.746) y en 4 UMA (\$101.492) los correspondientes a la representación letrada de la demandada, conf. CSJN. Res.2722. A dichos importes se agregará IVA en caso de corresponder.

En virtud de lo expresado propongo se habilite la instancia judicial, confirmando la resolución recurrida. Imponer las costas a la apelante (art. 68 CPCCN), y por último fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA (\$ 50.746) y en 4 UMA (\$101.492) los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada. A dichos importes se agregará IVA en caso de corresponder.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Walter F. Carnota.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Carnota en cuanto a la habilitación de la presente instancia, disiento en cuanto a la solución propuesta.

Ahora bien, según surge de la resolución atacada la administración luego de analizar la prueba acompañada por la recurrente, más allá de resaltar su estado de rebeldía administrativa y señalado que la presentación no cumplía con el procedimiento de inmediatez previsto en el art. 6 de la Res METSS n°655/05, sin perjuicio de ello en honor al principio de oficialidad y de verdad material que rige el procedimiento administrativo procedió a analizar la documentación acompañada y concluyó que los medios defensivos utilizados resultan insuficientes a los fines de eximir de responsabilidad a la empresa REMADEx S.A. toda vez que el acta de comprobación no ha sido desvirtuada por lo que considero que correspondía imponer la multa aquí cuestionada. Posteriormente ante la interposición del recurso de revisión el Ministerio de Trabajo Empleo y seguridad social –en adelante el Ministerio- procede a efectuar un nuevo y más detallado análisis de la cuestión, allí afirma que los trabajadores relevados declararon laborar en actividades de “promoción” mencionando fecha de ingreso y jornada de trabajo cuando denunciaron a la sumariada como su empleadora.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

La empresa en su expresión de agravios describe que el Ministerio mediante constancia de relevamiento del expte 7-99-938921-2018 se intenta establecer que su representada mantiene 19 trabajadores en relación de dependencia sin la debida registración y declaración. Sostiene que respecto de las personas que se encuentran indicadas como trabajadoras que debieran ser registradas y declaradas, en realidad se trata de agentes inmobiliarios relacionados con la firma REMADEx S.A. a través de contratos de agencia, los cuales fueron debidamente aportados como prueba documental, la cual –según señala- no fue debidamente meritada.

Entiendo que asiste razón a la recurrente en atención a que no encuentro suficientemente acreditadas las notas tipificantes de una relación laboral, robustece esta premisa la falta de un detallado análisis de la prueba documental acompañada a fs 132/1137 del expte digital 01.-Expte. Nro. 7-99-938921-2018 - Cpo. 1.pdf entre la que se advierte: Contratos de agencia suscriptos por los sujetos relevados y la empresa REMADEx S.A., cartas de oferta, facturas electrónicas emitidas por los presuntos trabajadores a la empresa REMADEx S.A.

Asimismo, no es un dato menor que el propio ministerio en otros supuesto de artistas similares con la misma empresa ha considerado que: “...teniendo en consideración las manifestaciones vertidas por la recurrente, los datos vertidos por las personas afectadas, la prueba documental aportada y las verificaciones efectuadas surgen dudas del vínculo dependiente entre las partes por lo que corresponde revocar la resolución en crisis y absolverla de la multa impuesta...” (Ver RESOL-2022- I 6955-APN-DRLF#MT).

“...Que...teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en defensa de la imputada, las constancias de autos, la prueba documental arimada....se genera en esta autoridad de aplicación un razonable margen de dudas como para imponer sanción, razón por la cual también se absuelve a la requerida de la multa que le correspondería por infracción a la Ley No 11.683...” (Ver RESOLUCIÓN D.R.F. No: 58100/2017).

“...que de las constancias de autos surgen razonables dudas respecto del carácter dependiente de la prestación de servicios constatada. Que si bien el artículo 23 de la ley 20.744 (Texto ordenado por decreto n° 390/76 y sus modificatorias) pone en cabeza del empleador el acreditar la inexistencia de vínculo laboral cuando, como en el caso de autos, se encuentra constatada la prestación de servicios, esta Autoridad entiende que estaba acreditado los agentes llevan a cabo a la organización empresarial a su propio riesgo, cabe tener por desvirtuada dicha presunción legal, en cuento de tal circunstancia puede inferirse el carácter comercial del vínculo . Que por ello, se absuelve de la multa que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

correspondería toda vez que se ha logrado desvirtuar el contenido del acta de comprobación.) (Ver Resolución DRF n°59525/2017)

La declaración de la recurrente y documental acompañada que acreditaría la existencia de un vínculo comercial entre la empresa REMADEx S.A. y las personas relevadas, ameritaban la necesidad de una mayor investigación a ésta, lo que me lleva a sostener que el organismo no ha agotado el procedimiento para dilucidar la cuestión.

La presunción debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustivo, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. Resulta oportuno poner de manifiesto que existiendo hechos y pruebas contradictorias, el fisco no debió quedarse con los datos vertidos en el acta sino que por el contrario, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, la autoridad administrativa debió dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, máxime cuando se denunciaron modalidades contractuales como el contrato de agencia, expresamente prevista en el Código Civil y Comercial desde el año 2015 en su artículo 1479 y siguientes..

Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los agentes involucrados, son en realidad trabajadores. Supuesto de extrema gravedad que requiere de parte de quien efectúa tal imputación el máximo de prudencia.

Tener una visión completa de la situación hubiera exigido de parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, el exhaustivo análisis de la documental acompañada, a modo de constatar cuál era el verdadero vínculo entre los sujetos involucrados, como parte de un -presunto- contrato de agencia y prestación de servicios.

En este sentido, no se trata de cumplir con un ritualismo procedimental, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del interesado. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

Por consiguiente propicio se declare la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en su consecuencia.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas a la impugnante (art. 68 CPCCN), 4º) Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA (\$ 50.746) y en 4 UMA (\$101.492) los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada. A dichos importes deberá agregarse IVA en caso de corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

